

Para combatir el coronavirus

FONDO DE EMERGENCIA

**Impuestos a los bancos,
multinacionales, grandes
empresarios y al no pago
de la deuda externa**

YA

Fondo de emergencia y que siga la cuarentena

La pandemia mundial del coronavirus, con sus terribles consecuencias de miles de muertos, hospitales colapsados más la ola de despidos y rebajas salariales para millones de trabajadores en el mundo, es seguida con una enorme preocupación en nuestro país. El cumplimiento del aislamiento ha sido incorporado en la vida de millones de trabajadores y sectores populares como forma de prevenir el contagio para no llegar a las escenas que se viven en Italia, Estados Unidos o Ecuador. Por eso se siguen con atención los consejos de médicos e infectólogos y hay debates sobre si usar o no masivamente los barbijos, mientras se dan peleas todos los días contra las patronales exigiendo insumos básicos para poder prestar servicios esenciales o atender en los hospitales.

En la Argentina estamos en cuarentena y el próximo 13 de abril, el gobierno tiene que decidir cómo continuar. Alberto Fernández ha dicho: “Nunca vamos a terminar la cuarentena, pero podemos flexibilizarla”. Pero detrás de la palabra “flexibilizar” ya se han sumado diez rubros como nuevas actividades “esenciales” a pedido de empresarios y gobernadores. Se llegó al caso de incorporar a la minería como esencial, también a la obra privada de infraestructura energética y al comercio exterior, entre otros. Pero la minería no es esencial, salvo para las ganancias de Barrick y otras multinacionales depredadoras y contaminantes. Tampoco el comercio exterior, seguramente exigido por las grandes exportadoras que hacen negocios en dólares. También se habla de ampliar turnos en las automotrices a pedido de las multinacionales (General Motors, Toyota, Volkswagen, Fiat-Chrysler, Ford, Peugeot-Citröen, Renault). Pero fabricar autos no es ninguna prioridad. Techint, que acaba de ratificar los 1.450 despidos con la complicidad del Ministerio de Trabajo y la conducción burocrática de la Uocra, venía pidiendo que se declaren “esenciales” distintas actividades de su grupo. Está claro que a estos grandes empresarios no les interesa la salud de sus traba-



jadores ni de la población, sino cómo engordar sus ganancias capitalistas.

El gobierno ha dicho que no van a empezar las clases, ratificando que el pico de la pandemia será en abril o mayo. “No tenemos que echar a perder el esfuerzo que ya se hizo”, señaló. Y puso un ejemplo: “Si a una fábrica entra una persona con coronavirus va a contagiar a todos sus compañeros”. Entonces, si esto es así, debe prorrogar la cuarentena hasta tener la garantía de que el virus no es una amenaza. En Italia hubo huelgas precisamente para que se cierren las fábricas ante la desidia de patronales que obligaban a sus trabajadores a poner en riesgo sus vidas en plena pandemia mortal. Por eso repudiamos que mientras el gobierno dice que “prioriza la salud de los abuelos” haya empujado a un millón de jubiladas y jubilados a romper la cuarentena para poder cobrar.

Sabemos que millones de trabajadores que vienen haciendo un gran esfuerzo por cumplir la cuarentena ante la desesperación de tener que salir a la calle para ganarse el pan o poder pagar la luz o el alquiler, tengan lógicas dudas y se puedan preguntar si no hay que volver a la normalidad. Pero a todos ellos les decimos que es necesario seguir cuidándose. Y, mientras mantenemos el aislamiento, debemos exigirle al gobierno que no ceda a la presión de la gran patronal y que garantice poner toda la plata que haga falta para invertir en salud y los hospitales públicos, haciendo lugar a las innumerables demandas de los profesionales, enfermeras y trabajadores de la salud. También para garantizar la comida (y que no se hagan negociados como acaba de suceder con las compras de fideos y aceite), triplicar los planes sociales,

aumentar las jubilaciones, obligar a las empresas a que paguen los salarios y no despidan y para que se garanticen todos los insumos para seguir ganándole la pelea al coronavirus y enfrentar la crítica situación social.

Izquierda Socialista sostiene que con las medidas del gobierno no alcanza. Por eso hace falta implementar de manera inmediata un fondo de emergencia sobre

la base de un fuerte impuesto a los bancos, multinacionales y grandes empresarios y el no pago de la deuda externa. Proponemos, en concreto, un impuesto especial de 10% a la fortuna de los cincuenta millonarios del país (encabezados por Paolo Rocca, de Techint) y a las ganancias de los veinte grupos económicos nacionales y extranjeros (bancos, multinacionales, privatizadas, supermercados, petroleras, laboratorios y exportadoras). Y con la plata del no pago de la deuda se podría duplicar todo lo que dispuso el gobierno para la pandemia y además triplicar los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas, designar los 2.500 profesionales de la salud que pide el gremio Cicop o comprar miles de respiradores y millones de barbijos, entre tantas otras medidas para la emergencia.

Trascendió que diputados nacionales como Máximo Kirchner y Hugo Yasky, de la CTA, estarían estudiando un proyecto de ley para implementar un impuesto a la riqueza de 1,5 por ciento. Nuestra propuesta es de 10% pero, aunque sea de 1,5%, sería un primer paso. Lo fundamental es que estas medidas no deberían demorarse más e implementarse de manera inmediata por decreto de necesidad y urgencia, como se hizo con la prohibición de despidos por sesenta días. El presidente propuso que se debata en el Congreso, que no funciona. Este dinero es urgente. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que hace falta un fondo de emergencia para que, mientras se sigue garantizando la cuarentena para combatir el coronavirus, se destinen los recursos necesarios para combatir las urgentes necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.

Sobrepuestos en los alimentos: el primer hecho de corrupción del gobierno



Escribe **Juan Carlos Giordano**
Diputado nacional electo
Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobrepuestos. Desopilante.

Al revelarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “carteli-

zación”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? “Yo creo en la honestidad



de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente”, dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!

¡Con los jubilados NO!

Escribe **Juan Carlos Giordano**
Diputado nacional electo
Izquierda Socialista en el FIT Unidad



Lo que están haciendo el gobierno y los bancos con los jubilados es directamente criminal. Por eso ha generado una enorme indignación popular. La bronca se expresó con los lemas #ConLosJubiladosNo y #OtraVez-SeLaAgarranConLosJubilados. Al presidente Alberto Fernández, que venía ascendiendo en la aceptación popular, con este grave hecho se le está desdibujando la aureola de que “viene haciendo todo lo posible” ante la crisis del coronavirus.

Un millón de jubilados fueron obligados a romper la cuarentena. Se expresó así un enorme desprecio, desidia e improvisación por parte del gobierno. Los infectólogos señalan que “estuvieron en peligro” (de contagiarse y ser posibles víctimas), o sea, se jugó con la vida de nuestros ancianos.

Después de veinte días de cierre de bancos y sin poder cobrar aún el mes de marzo, fueron empujados a salir a la calle junto con otros beneficiarios de planes sociales (embarazadas o de la asignación por hijo, por ejemplo). Ver colas de varias cuadras con gente mayor –incluso muchos obligados a acampar desde la noche anterior– para ganarse un lugar y poder cobrar es directamente triste y lamentable.

Ahora se pasan la pelota entre funcionarios del gobierno y los bancos para evadir su responsabilidad. ¡Todos son responsables y el gobierno es el mayor! “No esperábamos tanta afluencia de público”, dijo Alejandro Vanoli, titular de la Anses y ex presidente del Banco Central de Cristina Kirchner, uno de sus niños mimados. Miguel Pesce, presidente del Banco Central, dijo que fue una “situación inédita”. ¿Pero no sabían

que la reapertura de los bancos tras dos semanas de cierre en medio del hambre y la pobreza iba a generar estas aglomeraciones? ¿Dónde estuvo el plan previo para prevenirlo? Esto mismo ya había ocurrido en el verano con 40 grados de temperatura para cobrar los bonos de diciembre, y se volvió a ver la semana pasada cuando tuvieron que cobrar otros sectores.

Hay solo una sucursal bancaria cada 5.200 jubilados. ¿Por qué no se abrieron más? ¿Por qué no se obligó a todos los bancos a pagarles a los jubilados, más allá de que tengan o no cuenta en la entidad? “No todas están interesadas en pagar a los jubilados”, se dice. Precisamente porque esto implica más inversión, más empleados, algo que los bancos no están dispuestos a brindar, con la complicidad del gobierno. Son los mismos bancos que vienen haciendo fortunas, ahora con

el Frente de Todos y antes con Macri, el peronismo kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Los que se vienen llevando sus ganancias “en pala”.

Este hecho muestra también el mar de fondo: la desesperante situación en la que viven millones de jubilados. Dos millones de mayores de 65 años están bajo la línea de pobreza. Tres millones cobran la mínima de \$15.892, mientras la canasta de un jubilado está en 40.000 pesos. Es decir, ya vienen siendo un “grupo de riesgo” desde mucho antes, culpa de los recortes de todos los gobiernos.

Macri les robó 100.000 millones de pesos en diciembre de 2017 con la modificación a la ley de movilidad (actualización jubilatoria) provocando un enorme repudio popular frente al Congreso. Y ahora es el gobierno de Alberto Fernández el que recortó una cifra similar con la denominada “ley de emergencia” votada a fin del año pasado.

¿Por qué ocurre esto? Porque el gobierno viene aplicando un ajuste para hacer buena letra con el FMI y pagar la deuda externa. Y este hecho lamentable ocurrió en la misma semana en que el gobierno pagó u\$s250 millones por un vencimiento de la deuda usurera, graficando cuál es la prioridad del gobierno.

¡Basta de que sean víctimas nuestros jubilados! ¡Basta de impunidad para los banqueros que siguen haciendo fortunas! ¡Basta de jubilaciones y planes sociales de miseria! Exigimos aumento de emergencia sobre la base del no pago de la deuda y un impuesto especial a los bancos, grandes empresarios y multinacionales para implementar un fondo de emergencia para combatir de verdad la crisis del coronavirus porque las medidas del gobierno claramente no alcanzan.

Fondo de emergencia YA: que pongan la plata los grandes empresarios, las multinacionales y los banqueros

El gobierno de Fernández plantea que cobrará un impuesto especial a las grandes fortunas. El Frente de Todos impulsa en el Congreso, en este sentido, lo que llama el “impuesto Patria”. Le exigimos que lo haga de inmediato. Junto con el no pago de la deuda son las dos grandes fuentes para conformar un fondo de emergencia para atender las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia.

Escribe **José Castillo**

Luego de que Techint intentara despedir 1.450 trabajadores, el propio presidente Alberto Fernández salió a cuestionar el accionar de los grandes empresarios ante la crisis: “Los empresarios son miserables y tienen que ganar menos”.

Se prohibieron las suspensiones y los despidos, pero se dejó abierta la posibilidad para que lleven adelante “acuerdos” con la burocracia sindical. Así se terminó habilitando a que Techint termine efectivizando los despidos. Las reducciones salariales se van transformando en algo “común” en muchas empresas. Hay formalmente precios máximos, pero empresas como Coto o Farmacity los burlan impunemente. Los grandes capitalistas de la salud privada aprietan al gobierno y logran, rápidamente, abortar cualquier intento de obligarlos a poner sus clínicas al servicio de la pandemia. Los bancos ni siquiera respetan las tibias indicaciones del Banco Central de prestar a tasas más bajas. Y todos, sin excepción, hacen lobby para que se levante lo más rápido posible la cuarentena: están desesperados por que sus obreros y empleados vuelvan a trabajar para poder así volver a explotarlos aún a costa del riesgo sanitario que implica.

El gobierno ha anunciado que cobrará un impuesto a las grandes fortunas y ganancias. Máximo Kirchner y Hugo Yasky han dicho que motorizarán un proyecto en ese sentido en el Congreso, cobrando una alícuota a dichas riquezas de entre el 1,25 y el 1,75%, además de un impuesto especial de 10% a las ganancias superiores a 50 millones de pesos. Le exigimos al gobierno que lo ponga en práctica ya mismo. Que no suceda como con el amague de controlar la salud privada: que



lo concreten urgentemente. Porque la plata para enfrentar la crisis es más necesaria que nunca.

Frente a la emergencia hay que actuar con firmeza. La crisis la deben pagar aquellos que, desde siempre, vienen amasando grandes fortunas.

Desde Izquierda Socialista afirmamos que está clarísimo a quién se lo debe aplicar. En nuestro país hay cincuenta supermillonarios que, juntos, acumulan una riqueza personal de 70.000 millones de dólares (datos revista Forbes). Si se les impusiera un impuesto especial del 10% a esas fortunas, tendríamos 7.000 millones de dólares (560.000 millones de pesos).

Las ganancias de los bancos son obscenas, ya en 2018 habían ganado 144.417 millones de pesos. Pero en 2019, con la economía argentina en caída libre, aumentaron a más del doble sus ganancias: 302.863 millones de pesos.

Techint, la mayor multinacional argentina, que el año pasado facturó en el mundo 18.500 millones de dólares, tuvo la salida miserable de despedir masivamente a sus trabajadores. Las petroleras (Chevron, Panamerican Energy, Pluspetrol, Tecpetrol) vienen saqueando nuestro gas y petróleo y superexplotando a sus trabajadores flexibilizados en Vaca Muerta. Barrick Gold y otras mineras no solo saquean sino que destruyen nuestro ambiente. Las privatizadas siguen gozando de los tarifazos y los subsidios mientras continúan burlándose de

los usuarios con servicios de pésima calidad. Los monopolios del agronegocio (Cargill, Vicentín, Cofco, Bunge) hacen millonadas con las exportaciones de soja. Las grandes cadenas de hipermercados (Coto, Carrefour, Cencosud, Wall Mart) abusan de los precios. Las automotrices no esperan un segundo para suspender masivamente y reducir los salarios de sus trabajadores. Las empresas de medicina prepaga, que diariamente estafan a sus clientes, hoy se niegan a perder un peso frente a la pandemia. Un impuesto de 10% a las ganancias de los principales 20 grupos económicos, permitiría recaudar 20.000 mil millones de pesos. Sumando todo ese dinero, el de los impuestos a las grandes fortunas y el de las ganancias de las grandes empresas, se podría duplicar todo lo que hasta ahora puso el gobierno frente a la

pandemia: se tendrían 10.000 millones de dólares extra.

Nuestro proyecto, sin duda, plantea cobrarle mucho más a los ricos y las grandes empresas que lo que propone el del gobierno. E identifica de movida quiénes deben ser los que paguen. Pero no queremos hacer una cuestión de números o porcentajes. Lo que le exigimos a Alberto Fernández es que implemente ya mismo ese impuesto del que está hablando.

Porque están claramente identificados los megamillonarios y las grandes empresas que han hecho fortunas fabulosas a costa de los trabajadores y el saqueo de nuestro país. Todos ellos son los que deben pagar la crisis. A ellos debe imponérseles ese impuesto especial a las ganancias y facturación de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, que hacen sus superganancias en nuestro país. Con el impuesto a las grandes fortunas personales y el dinero que se conseguiría por la suspensión del pago de la deuda externa se debería conformar un fondo económico de emergencia que atienda las necesidades sanitarias (compra de respiradores, instalación de nuevos hospitales, contratación de más trabajadores de la salud) y sociales (comida, dinero para los desocupados y aquellos que se quedaron sin ingresos por la pandemia, obra pública para generar trabajo). Así se haría realidad lo que venimos sosteniendo desde el estallido del coronavirus, que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

NO A LA REBAJA SALARIAL

No a la rebaja salarial

Escribe **Claudio Funes**

Hay una auténtica campaña llevada adelante por el conjunto de las patronales para promover rebajas salariales generalizadas con la excusa de la crisis del coronavirus.

El decreto 329, del 31 de marzo, firmado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el despido unilateral pero admite acuerdos con los sindicatos para bajar hasta 50% los salarios, como de hecho ya está ocurriendo. El artículo 3° del decreto exceptúa de la prohibición a las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Siguiendo esta normativa, la cartera de Trabajo autorizó a la aerolínea low cost Flybondi, en acuerdo con los propios sindicatos, a la suspensión de actividades por noventa días con una rebaja salarial de 30% y cláusulas de flexibilidad, a cambio de mantener los puestos de trabajo. Entre tanto, Latam recortó 50% los haberes de sus 2.300 empleados en la Argentina entre los meses de abril y junio. También, la cadena de pizzerías La Continental rebajó 50% del sueldo de marzo a sus trabajadores, y el millonario empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, con el argumento de que bajó la producción de la planta 50% por el aislamiento, anunció que recortará los salarios de abril.

La gran patronal aprovecha la trágica crisis del coronavirus para hacer realidad sus viejos anhelos: rebaja salarial y flexibilización laboral a cambio de no despedir. Una miserable



extorsión. Para ello cuenta con la inestimable complicidad de la burocracia sindical peronista.

Las cadenas multinacionales de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy's, KFC y Mostaza, a pesar de que vienen ganando fortunas en todos los países donde operan, redujeron más de 30% de los sueldos y el presentismo a sus trabajadores. Un verdadero atropello.

Ford e Iveco suspendieron a su personal, que cobrará el 70% del salario. Lo mismo hicieron otras automotrices. Muchas continuarán en abril este esquema de suspensiones. Mientras tanto, las autopartistas negocian con la burocracia sindical un salario de “emergencia”.

El sector comercial también aplica suspensiones. La empresa Dabra S.A., que controla marcas como Dexter, Stock Center y Netshoes, cerró sus locales y licenció a su personal con el argumento de “cuidar la salud de la empresa”, pero sus empleados percibirán durante abril el 50% de sus haberes. Mientras tanto, Garbarino y Compumundo solo pagaron un tercio de los sueldos.

El hotel Alejandro I, de la millonaria familia Levin, abonó marzo con un 25% de quita alegando que desde “Nación no le enviaron el dinero”.

A esto le agregamos que, según estadísticas oficiales, cuatro de cada diez trabajadores (cinco millones) desarrollan sus tareas en la informalidad y bajo regímenes laborales ilegales, por lo que los podrán seguir flexibilizando, suspendiendo o despidiendo.

Como se puede apreciar, los “vivos” continúan lucrando. No es ninguna excusa que “este mes no facturaron” cuando en la mayoría de los casos se trata de patronales que ya han ganado millonadas los años anteriores.

No tenemos que permitir la reducción de los sueldos. Hay que exigirle a la burocracia sindical que abandone su actitud cómplice y salga a defender que se pague el 100% de nuestros salarios, ya bastante vapuleados por la inflación. Lo que se necesita son aumentos de acuerdo a la inflación, ninguna rebaja. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Techint avanzó con los despidos: ¡reincorporación inmediata!

Escribe **Martín Fú**

El Grupo Techint ratificó el despido de 1.450 operarios de la construcción que prestaban servicios en Neuquén, San Nicolás, Campana, Marcos Paz y Tucumán. Lo hizo burlándose de la conciliación obligatoria y del decreto de prohibición de despidos del gobierno nacional que el presidente Fernández había anunciado el pasado 1° de abril. Para ello contó con el aval de la burocracia sindical de la Uocra y la firma de su titular, Gerardo Martínez. El Grupo Techint y el sindicato cerraron filas así para dejar afuera a casi 1.500 trabajadores, todo refrendado y homologado por el Ministerio de Trabajo.

A días del “enojo” presidencial con Paolo Rocca, a quien tildó de “miserable”, el gobierno nacional no necesitaría más

argumentos para declarar la nulidad del acta firmada entre la patronal Techint y la conducción de la Uocra y obligar a ese grupo empresario negrero a la reincorporación de los 1.450 trabajadores, exigiendo además que se les paguen sus salarios. Paolo Rocca es uno de los empresarios más ricos del país y de Latinoamérica, con una fortuna calculada en u\$s 8.800 millones, aparte de las ganancias siderales que obtiene de sus empresas.

El intento original de despidos en Techint fue repudiado y generó una rápida respuesta del gobierno de Alberto Fernández, quien avisó que “no le va a temblar el pulso contra los vivos” que se aprovechan de la pandemia y hasta se animó a pedirle a los empresarios



que ganen “un poco menos”. Es urgente arbitrar todos los medios y obligar ya a la reincorporación de los despedidos de Techint. Si así no ocurriera debe ser expropiada y estatizada y puesta bajo el control de sus trabajadores, lo mismo hay que hacer con toda empresa que se anime a despedir o cerrar mientras dure la pandemia.

Frenar despidos y suspensiones

El martes 31 de marzo, el gobierno emitió un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) determinando la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días. Sin duda, esta medida es un avance frente a la postura oportunista y aprovechadora de muchas patronales ante la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, la consideramos insuficiente.

Escribe **Adolfo Santos**

La repudiable actitud de la poderosa Techint, suspendiendo el contrato laboral de 1.450 trabajadores, provocó una reacción de repudio generalizada a la que Alberto Fernández se vio obligado a responder. Pero en su respuesta, el presidente, se equivoca al pedirle a Paolo Rocca a quien llamó de “hermano”, que “debemos recuperar la ética de la solidaridad”. Ni Techint, ni las grandes empresas responden a la “ética de la solidaridad”, sino a la multiplicación de sus ganancias, por eso son capaces de despedir trabajadores en medio de una tragedia, por eso es necesario frenarlos.

En ese sentido entendemos que el DNU es insuficiente. Porque deja sin respuesta a los miles de trabajadores que



fueron suspendidos y despedidos en los días previas a su promulgación. Pero además, porque deja abierta la posibilidad de que, “si hay acuerdo entre las partes”, se puedan efectivizar despidos. Esa puerta, en una negociación entre una gran empresa y un trabajador desprotegido, es un gravísimo error.

El DNU es “por 60 días”. Debería ser por tiempo indeterminado, ya que además de no saber hasta cuando habrá de

extenderse la pandemia, no sabemos cuáles serán las secuelas que dejará. Los grandes empresarios, como estamos viendo en los Estados Unidos o en Brasil, quieren que la crisis la paguen los trabajadores y producen despidos. Para eso debemos prepararnos.

En ese sentido, desde Izquierda Socialista venimos proponiendo una serie de medidas para proteger a la familia trabajadora, que será la más afectada por esta crisis. Además de la prohibición de despidos y suspensiones, exigimos que no haya ningún tipo de rebaja salarial ni de precarización laboral. Que se implemente un impuesto especial a las grandes fortunas y ganancias, así como el no pago de la deuda externa para crear un fondo de emergencia con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales. Y junto a la prohibición de despidos y suspensiones, disponer que toda gran empresa que no tenga condiciones de garantizar el empleo, sea estatizada bajo control de sus trabajadores.

General Motors reduce salarios en acuerdo con la burocracia

Escribe **Claudio Funes**

General Motors, la transnacional automotriz yanqui con sede central en Detroit (Estados Unidos) y con decenas de miles de trabajadores en el mundo, implementó también en la Argentina su estrategia global.

Amparándose en la crisis provocada por el coronavirus y en la posibilidad de los despidos, negoció con la burocracia del Smata reducciones de jornadas laborales y suspensiones para empleados administrativos con una quita de 12,5% para los que realizan trabajo a distancia.

General Motors acordó con el burócrata Ricardo Pignanelli la suspensión de los empleados bajo contrato colectivo de trabajo, pagando el 70% del salario neto, medida que está en vigor desde el 1° hasta el 30 de abril. Cabe recordar que General Motors de General Alvear, Santa Fe, no estuvo activa durante todo febrero y por esto pagó salarios reducidos a todos sus trabajadores.

Como vemos, el decreto que prohíbe suspensiones y despidos es fácilmente burlado por esta maniobra con la excusa de un “acuerdo entre patronal y sindicato”.



Solo la izquierda gana como un trabajador

Escribe **Claudio Funes**

Ciertos sectores de la sociedad reclaman con razón que los políticos se bajen sus altos ingresos para que ese dinero vaya a fortalecer la lucha contra la pandemia. Es notorio el contraste entre la vida de un político y un trabajador, más si este se encuentra desocupado o suspendido como consecuencia de la actual crisis.

Que los políticos no deben ganar esas sumas siempre ha sido denunciado por la izquierda revolucionaria. Nuestros diputados y legisladores siempre han propuesto que un político gane lo mismo que un trabajador. Aunque nunca haya sido votado, igual siempre se han apegado a ese principio. Cobran el salario de un trabajador, el resto lo aportan a las luchas obreras y populares y a fortalecer una alternativa política de los trabajadores y la unidad de la izquierda, como ocurre con Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Ahora, para reubicarse, distintos políticos patronales han decidido bajarse una parte de sus abultados sueldos. Sergio Massa anunció un recorte de 40% en la dieta de los



diputados. En Santa Fe, los diputados y senadores provinciales donarán 50% de su dieta a “instituciones de bien común del sistema sanitario de cada departamento”. Intendentes de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, entre otras, han hecho lo mismo para decir que “aportan con su sacrificio” al esfuerzo colectivo para combatir la crisis. Lo que nadie dice es que la izquierda siempre propuso que todo diputado, senador,

juez y funcionarios ejecutivos deben ganar como un trabajador. Y que, como eso nunca se aprueba, es solo la izquierda quien lo cumple.

No debemos olvidar un antecedente. En 2017, en pleno ajuste macrista, estos “sacrificados hombres y mujeres” de PRO-UCR-ARI (Cambiemos), del Frente para la Victoria de entonces (con Héctor Recalde como presidente de bloque) y del Movimiento Evita, entre otros, solicitaron un aumento en sus dietas porque decían que no podían vivir con 150.000 pesos mensuales. El único bloque que denunció eso y rechazó el aumento fue el del FIT, entre ellos nuestro diputado Juan Carlos Giordano.

Hoy esos mismos diputados y senadores que posan de solidarios son los que aprobaron la ley de emergencia que les robó 100.000 millones de pesos a los jubilados en diciembre de 2019 y aprobaron la ley de renegociación de la deuda externa en enero de 2020. Por eso denunciamos su demagogia y marketing político. Para combatir la pandemia no alcanza con estos “gestos”, sino implementar un impuesto a los de arriba y dejar de pagar la deuda, algo que estos políticos tradicionales no hacen.

DEUDA

¡Basta de “renegociación”! Hay que suspender inmediatamente los pagos de la deuda

El gobierno continúa adelante la renegociación de la deuda con los pulpos acreedores. Lo hace mientras el país y el mundo se derrumban en medio de la crisis del coronavirus. Entre los usureros privados y el FMI están en juego 150.000 millones de dólares que vencen entre este año y los dos siguientes. La alternativa es de hierro: la plata va a los usureros o a la emergencia sanitaria.

Escribe **José Castillo**

El presidente Alberto Fernández ha dicho en estos días que “no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo”. Sin embargo, casi al mismo tiempo, su ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa adelante con el “cronograma” de renegociación con los acreedores extranjeros.

Ahora se ha “reprogramado” hasta 2021 los vencimientos de bonos de deuda sometidos a legislación local. Pero el corazón de la deuda externa son los bonos en dólares con legislación extranjera. Y ahí se sigue en infinitas consultas con los propios pulpos privados internacionales que dejaron trascender que “no aceptan” los plazos que plantea el gobierno para correr los vencimientos (se habla de tres años) y exigen mayores pagos por intereses. Y, por supuesto, prosigue el tironeo por el monto de la quita. Digámoslo claramente, aunque se llegara a negociar una supuesta quita de 50%, igual los especuladores internacionales ganarían, ya que actualmente los bonos argentinos cotizan por debajo de 30%, con lo que se llevarían una ganancia sin mover un peso de 20%, hoy imposible de alcanzar en cualquier otra operación financiera del mundo.

Como si todo esto fuera poco, desde el propio Ministerio de Economía se dejó saber que el gobierno de Fernández estaría dispuesto a “mejorar la oferta” por medio de los llamados “cupones PBI”. Algo que se inventó y está vigente para los bonos que se canjearon



durante el kirchnerismo en 2005 y 2010. Se trata de un “extra” que se les ofrece a los acreedores, cada vez que el país crece 3% se genera automáticamente una deuda extra con los acreedores, de pago inmediato. Una auténtica estafa.

Lo increíble es que estemos discutiendo todo esto en medio de la crisis del coronavirus.

Los propios economistas del establishment reconocen que se están rompiendo todas las “cadenas de pago” del mundo. Esto quiere decir que los propios capitalistas están dejándose de pagar las deudas entre ellos.

Todo es tan ridículo que cada vez surgen más voces de economistas y periodistas con simpatías con el propio gobierno que empiezan a hacer su oír su voz planteando que no hay que seguir negociando y suspender los pagos. Incluso economistas del establishment local y extranjero reconocen que, en estas condiciones, lo mejor que puede

hacer la Argentina es dejarse caer en default, por lo menos hasta que pase lo peor de la crisis.

Lo más grave de todo es que no se trata solamente de una “negociación” que se extiende en el tiempo en el que nuestro país lleva todas las de perder. Mientras tanto se siguen pagando religiosamente los vencimientos con los acreedores extranjeros. Apenas asumió, Alberto Fernández mandó apartar, de las escasísimas reservas internacionales disponibles, 4.500 millones de dólares para atender esos vencimientos, que se están utilizando desde entonces (de hecho, los montos son tan elevados que en

mayo ese mismo pozo de dinero se terminará agotando). La semana pasada, ya en medio de la cuarentena, el gobierno pagó en efectivo 250 millones de dólares. Hay otro vencimiento dentro de diez días por 500 millones.

Lo venimos repitiendo desde hace años. Lo volvimos a decir apenas asumió Alberto Fernández. Ahora el planteo ya adquiere una urgencia extrema, tenemos que dejar ya mismo de pagar la inmoral, ilegal y usuraria deuda externa y volcar todos esos recursos a un fondo de emergencia para financiar la crisis sanitaria, comprando respiradores, millones de barbijos, montando hospitales, contratando y pagándole salarios dignos a todo el personal de salud necesario, y también para resolver las consecuencias económicas de la crisis que hoy pegan sobre el pueblo trabajador con comida, trabajo y salario para todos.

¿Pedirle más plata al FMI?

Escribe **Guido Poletti**

En estos días trascendió que el gobierno de Alberto Fernández tomaría un nuevo préstamo del FMI. Se trataría de alrededor de 3.000 millones de dólares que están a disposición de nuestro país en forma casi automática, según las propias regulaciones del Fondo.

La excusa es, obviamente, la crisis del coronavirus. Pero ya sabemos cómo van a terminar utilizándose, con ellos se quieren pagar los próximos vencimientos de deuda a los acreedores privados, que solo en mayo ascienden más o menos a la misma suma. Vemos, entonces, que no entrará un peso para la emergencia, no

se comprará ni un barbijo. Solo se “canjeará” deuda de los pulpos privados por deuda con el pulpo mayor: el propio FMI.

Se sumarán así a los 49.000 millones que ya reclama el organismo: 44.000 que le otorgaron a Macri (y que, como sabemos, se fugaron en su totalidad), 5.000 de intereses, y ahora 3.000 más si se efectiviza este nuevo préstamo. Deberemos 52.000 millones de dólares, que el Fondo nos hará pagar centavo por centavo (la propia Kristalina Georgieva, titular del organismo y de la que el gobierno se jacta de que es “su amiga”, aclaró que acá no corre ninguna “quita”). Y será la excusa para nuevos, y más duros, planes de ajuste contra el pueblo



¿Qué se podría hacer con la plata que se usa para pagar la deuda?

▶ **Con los u\$s250 millones que se pagaron la semana pasada se podrían haber comprado**

25.000 respiradores

8 millones de barbijos

2.500 cargos de la salud por un año

O, doce veces más de todo lo que se puso en salud desde que comenzó la pandemia

▶ **Con los 44.000 millones que hay que “devolverle” al FMI se podría:**

Comprar 50.000 respiradores

▶ **500 millones**
320 millones de barbijos

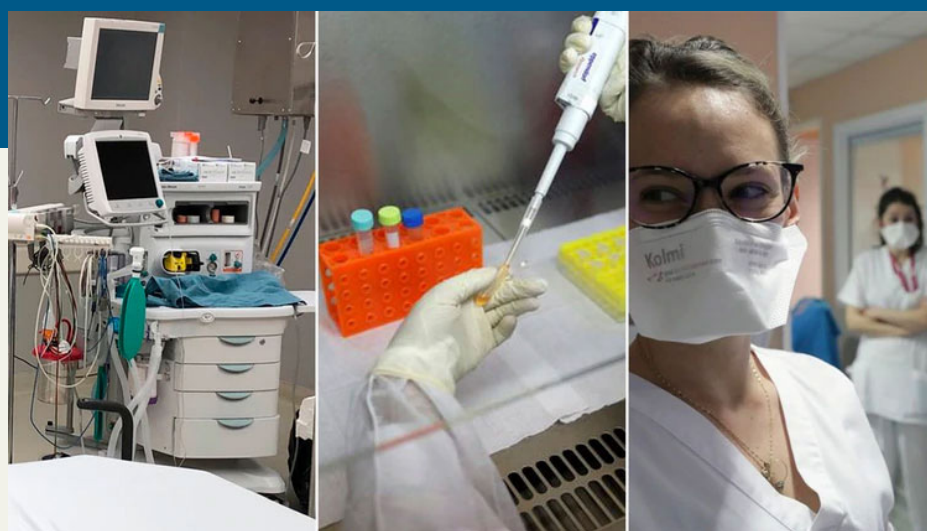
▶ **1.000 millones**
Nombrar 25.000 profesionales de la salud con un salario de \$60.000 por un año

▶ **2.500 millones**
Otorgar un incremento de \$20.000 a todos los jubilados por un año

▶ **18.000 millones**
Un subsidio de \$30.000 a 12 millones de personas sin ingresos por la crisis

▶ **4.500 millones**
Triplicar todo el dinero puesto hasta ahora para la crisis

▶ **17.500 millones**
(Todo junto) O construir un millón de viviendas dando trabajo a cuatro millones de desocupados



Siguen subiendo los precios de los alimentos: Hay que castigar a los especuladores

Escribe **José Castillo**

Se está dando una fortísima suba de los precios de los alimentos desde que empezó la cuarentena. Los cortes populares de carne y las frutas y verduras más necesarias están registrando aumentos que en muchos comercios llegan a 100 por ciento. También subieron los del resto de los productos de la canasta básica. Un cálculo conservador, realizado por consultoras privadas, registra incrementos de 40,2% en la zanahoria, 29,3% en legumbres secas, 20,3% en el azúcar, 20,6% la polenta, 15,7% la sal fina y 8% la carne picada.

El gobierno fijó precios máximos para muchos productos retrotrayendo los valores a principios de marzo. Pero, sea porque “casualmente” frutas, verduras y carne no están fuera de esa lista, porque muchos que figuran en esa lista o en precios cuidados “desaparecieron” de las góndolas, o porque muchos comercios directamente violan la disposición, lo concreto es que muchos solo se consiguen a precios muy elevados. A esto sumémosle la especulación que se está produciendo con el alcohol en gel, los barbijos y los productos de limpieza.

Se han dado varios casos, como en Coto o Farmacity, donde las grandes cadenas son las que “lideran” la violación a las disposiciones.

Evidentemente, así no hay bolsillo que aguante. Hay que hacer respetar los precios máximos y extenderlos a la fruta, la verdura y la carne y también a los medicamentos. Y, en los evidentes y masivos casos que se están dando de violación a esta disposición, proceder a aplicar la Ley de Abastecimiento que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que aumenten o acaparen estos productos.



Estatizar los recursos para enfrentar la pandemia

Escribe **Reynaldo Saccone**
Ex presidente de Cicop



El gobierno nacional, juntamente con los gobiernos provinciales, encara la lucha contra esta pandemia que se extiende por todo el mundo con dos estrategias principales: el aislamiento social preventivo obligatorio o cuarentena, y la cobertura del sistema de salud, el cual, al ser tremendamente deficitario, queda en realidad reducido al esfuerzo y sacrificio del personal sanitario en todas sus profesiones. Estrategias ambas al servicio de no gastar en salud para no tocar las ganancias de las grandes patronales y, al mismo tiempo, para poder pagar la deuda externa.

Durante la semana que pasó hubo dos hechos que pusieron en jaque la cuarentena. Por un lado, la imprudencia del gobierno que concentró miles y miles de jubilados frente a los bancos; por el otro, el apriete de la gran patronal que, preocupada por la caída de sus ganancias, busca reanudar la actividad económica. El gobierno cedió parcialmente, liberó algunas actividades y permitirá más después del domingo de Pascua. El aislamiento, joya de la corona de la política de salud de Fernández, comenzó a perder su brillo pese a la opinión predominante entre los infectólogos de que la cuarentena estaba frenando la explosividad del contagio. Con esta actitud, las autoridades gubernamentales abren inquietantes y negativas perspectivas para la evolución de la epidemia.

Para el gobierno, fortalecer el sistema de salud significa apretar a los trabajadores y no ampliar las instalaciones, los insumos y la cantidad de personal. Lo hecho en este sentido es pobre y completamente insuficiente. Es que el sistema de salud está fragmentado en tres partes en las que es imposible que se coordinen entre sí porque tienen distintas conducciones y objetivos. Primero, el subsistema estatal que es dirigido por

gobernadores e intendentes y subsidiariamente por la Nación; segundo, el de las obras sociales dirigido por la burocracia sindical, que tiene sus propios intereses; finalmente, el privado empresarial o prepago, orientado a obtener ganancias.

En tiempos que podríamos llamar “normales”, el conjunto no garantiza el acceso a la salud de todos y todas y mucho menos la equidad. Ahora, en época de crisis, se ponen al rojo vivo sus deficiencias. Es necesario organizar esta fragmentación reuniéndola bajo un mando y una administración única, que solo puede ser el Estado nacional, que se guíe por criterios sanitarios y no de lucro o de clientelismo político. Así lo hizo Irlanda el 24 de marzo pasado, aunque limitadamente. Nosotros, en cambio, planteamos la estatización de la totalidad del sistema de salud y que sea en forma permanente.

La producción de los insumos que se necesitan para la atención médica y para la prevención en la población general debe ser garantizada por el Estado. Por ejemplo, para asegurar la producción de respiradores, la fábrica que los hace debe ser estatizada y puesta a producir a triple turno. En los Estados Unidos el presidente le pidió a General Motors que reconvierta una de sus plantas para hacer respiradores. Lo mismo debe hacerse en nuestro país con otros segmentos de la industria que puedan ser reconvertidos para fabricar ese producto u otros. Por ejemplo, la escasez de barbijos, camisolines y otros elementos puede solucionarse confeccionándolos en la industria textil existente en el país.

La industria farmacéutica debe ser puesta bajo la propiedad del Estado para garantizar la provisión gratuita de sueros, insumos médicos para los internados y, por otra parte, remedios gratuitos para los portadores de enfermedades de riesgo;

lo mismo que antisépticos y demás elementos que ayuden a la prevención. La escasez de reactivos debe resolverse con la producción local para lo que deben desconocerse las patentes internacionales de todos estos elementos por causa de fuerza mayor. Así hizo Nelson Mandela en los '90 cuando desconoció las patentes para fabricar antirretrovirales en momentos en que Sudáfrica sufría una epidemia de SIDA. Lo mismo hizo Bush cuando los ataques bacteriológicos con ántrax en 2003; desconoció la patente de Bayer para poder fabricar en USA la medicación.

Las medias tintas del gobierno no son útiles para la lucha contra la pandemia. Son necesarias estas medidas de fondo para poner en pie de lucha al pueblo y derrotar la epidemia en la Argentina: aplastar y no aplanar la curva.

Más presupuesto de salud ante la emergencia

Escriben **Reynaldo Saccone** Ex presidente de Cicop y
Mónica Méndez Secretaria de Organización de Cicop



Los gobiernos y las patronales de los sanatorios no dudan en aprovecharse de los nobles sentimientos solidarios y humanitarios de los trabajadores de la salud. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires contesta con un llamado a la “mística” a quienes reclaman mejores condiciones de trabajo. El diario La Nación publica declaraciones de un enfermero dispuesto a hacer todas las horas extras que se le requieran y que, orgullosamente, revela que “hay personal que viene a trabajar con diabetes o enfisema”.

Los trabajadores de la salud, por su parte, no paran de inundar las redes sociales con denuncias sobre la insuficiencia de los medios de protección que les proporcionan sus empleadores. Reclaman, sin éxito, licencia para las embarazadas, los mayores de 60 años y quienes tienen una patología de riesgo, que son obligados a concurrir a los establecimientos a pesar del peligro que corren.

Es que la “mística” del ministro Gollán no confiere inmunidad. Durante la semana pasada se contagiaron dos médicas del hospital de San Isidro, una del hospital Diego Thompson, de San Martín, otra en el hospital de Moreno, y más recientemente un residente de anestesia de guardia en el hospital de Adrogué.

Mientras que La Nación, maliciosamente, publicaba declaraciones de un enfermero del Hospital Italiano que decía que le daba “más miedo enfermarme afuera que

dentro del hospital”, la jueza Rosalía Romero hacía lugar a un amparo presentado por trabajadores del mismo establecimiento donde se habían infectado diez de sus compañeros y emplazaba a los empleadores a proveer elementos de protección personal para desempeñar sus tareas. La magistrada hizo lo mismo con el Gobierno de la Ciudad en relación con los hospitales Moyano y Tornú.

Completando este cuadro de desprotección, la infección por Covid-19 no es catalogada como enfermedad profesional. Sus casos quedan a consideración del Consejo Médico de la Superintendencia de las ART. Cicop reclama un DNU del Poder Ejecutivo que la incluya en el registro de enfermedades profesionales.

El otro gran problema de los recursos humanos es su escasez. Tanto el Gobierno de la Ciudad, como el de la provincia de Buenos Aires, han recurrido a la demencial convocatoria a profesionales jubilados. Se ilusionan con que ellos acepten correr el riesgo de perder la vida, dada su edad, por sumar un sueldo a su jubilación. Habiendo centenares y centenares de profesionales egresados de excelentes residencias, tanto médicas como de enfermería y otras profesiones, recurren a los jubilados por un solo motivo: no pagar salarios que harían atractivo a los jóvenes trabajar en el sistema público.

Un ejemplo es la discusión salarial de los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires. La oferta del

gobierno, rechazada in limine por la Cicop, es de 42.214 pesos mensuales al profesional ingresante, cuando la canasta familiar determinada por el personal del Indec ronda los 60.000 pesos. Esa es la causa de la escasez de médicos de terapia intensiva en los servicios públicos.

El argumento es que no hay presupuesto. Efectivamente, con este presupuesto no se puede. Por eso reclamamos que debe triplicarse. Actualmente el gasto público en salud de todo el país asciende a 2,65% del PBI. Nuestro planteo es que debe llevarse, como mínimo, a 8% del PBI.

Pero no basta tener los fondos. Es necesario que los trabajadores intervengan en su asignación y monitoreen su distribución. Pero también en determinar las necesidades de recursos tanto humanos como materiales y en su distribución. Por eso planteamos que en cada establecimiento deben constituirse comités de crisis con participación de los trabajadores. Eso ya se hizo en la provincia de Buenos Aires durante la gran crisis de 2000/2001, en la epidemia de H1N1, y se está instalando en la actual pandemia. Hoy la actividad de los comités existentes está centrada en la adaptación de los establecimientos y la protección de la salud de todos los integrantes del equipo de salud y el reclamo continuo de recursos humanos e insumos. Deben extenderse a todos los hospitales para así, cuidados y responsables los trabajadores, seguirán poniendo sus esfuerzos sin correr riesgos de vida temerarios.

ESTADOS UNIDOS: en el centro de la tormenta

Escribe **Reynaldo Saccone** Ex presidente de Cicop

María Correa, inmigrante colombiana diabética de 73 años fue llevada por la ambulancia al hospital. En su casa de Queens, donde vivía desde hacía 20 años, sintió fiebre y dificultad respiratoria. Sus familiares la buscaron luego durante una semana y ni el hospital, ni los bomberos ni la policía sabían de ella. Finalmente, apareció en la morgue con el nombre cambiado por confusión de los paramédicos. Esta escena muestra la situación caótica que la epidemia ha creado en el país imperialista más poderoso del planeta.

En los Estados Unidos se han producido hasta la fecha cerca de 400.000 casos de COVID 19 de los cuales murieron 13.000. Solo en el estado de Nueva York se han acumulado 140.000 casos y 5500 muertes mientras que, en Queens, un barrio de inmigrantes, hubo 23.000 casos. Con estos números, Estados Unidos encabeza la triste procesión de las víctimas de la pandemia. Cifras que cobran su verdadera dimensión si las comparamos con las cantidades del mundo: cerca de 1.400.000 infectados y 74.000 muertos.

¿Cómo se pudo llegar a esta situación?

El gobierno de los Estados Unidos es el máximo responsable. Donald Trump minimizó en todo momento la importancia de la epidemia. Más aún, se desecharon los informes que alertaban el problema. Se sabe ahora que el principal asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, había advertido en términos crudos sobre cuán mortal y económicamente devastador podía ser el brote del nuevo coronavirus para Estados Unidos.

En los comienzos de la epidemia, la dictadura capitalista china hizo callar a Li Wengyang, el médico que descubrió la nueva enfermedad y aún está desaparecida la Dra. Ai Fen, su colega, que difundió la existencia de la virosis. Instalada ya la epidemia, la dictadura se acomodó y, con sus métodos brutales, adoptó medidas severas para frenarla. Trump, en cambio, acompañado por el hoy infectado premier británico Boris Johnson, planteó con claridad que era necesario preservar la economía y se negaron -ambos- a tomar las medidas necesarias para preservar la salud de la población.



Recién cuando la presión de los gobernadores se hizo insostenible, Trump se avino en forma parcial a tolerar las cuarentenas y otras medidas que tardíamente se establecieron en 39 de los 50 estados y que no lograron frenar la expansión de la virosis por todo el país.

La presión popular

Los gobernadores reflejaron en forma más directa la profunda inquietud, que el avance de la epidemia producía en amplios sectores populares en sus respectivos estados. En Chicago hubo denuncias públicas porque los afroamericanos que son el 30% de la población, constituían el 60% de los infectados. En otros estados los médicos de las emergencias y las enfermeras -que en muchos casos están haciendo frente a la oleada de pacientes con coronavirus y a la escasez de equipos de protección, están descubriendo que se les está reduciendo los adicionales. Muchos trabajadores de la salud son contratados por empresas de trabajo temporario y estas compañías están reduciéndoles el salario, haciendo recaer sobre ellos la presunta pérdida por la suspensión del trabajo no urgente. La empresa Alton Health, una de las principales contratistas de médicos y enfermeras, publicó un memorando el lunes 30 de marzo en el que informaba que “la empresa reduciría la cantidad de horas de trabajo de los médicos, los salarios del personal ad-

ministrativo en un 20%” y que suspendería los planes 401k (ahorro jubilatorio previo), las bonificaciones y el salario vacacional”.

Otra presión que han recibido los gobernadores es la que ejerce la comunidad científica. La más antigua y prestigiosa revista médica de los Estados Unidos, New England Journal of Medicine, que venía haciendo campaña por una política más agresiva del gobierno, publicó el 1 de abril un editorial con el provocativo título de “Como eliminar la epidemia en diez semanas” que contempla, en primer lugar establecer una conducción única que centralice todos los recursos sanitarios del país, cuarentenas estrictas, protección del personal de salud, puesta a disposición del poderío industrial para producir insumos médicos, subsidio y protección a los necesitados y, finalmente, investigar sobre la marcha remedios y vacunas. Un programa opuesto al de Trump.

¿Por qué no se pueden tomar las medidas necesarias para aplastar la pandemia?

Simplemente, porque en el capitalismo, la economía no puede parar de producir ganancia para el capital. Los grandes monopolios multinacionales y la gran burguesía de cada país no pueden dejar de ganar. Por eso presionan constantemente, de distintas maneras, para seguir funcionando más allá de cuantas víctimas se produzcan. Esta dinámica imparable, también, genera roces interburgueses entre los imperialistas como la lucha por los cargamentos de barbijos o de kits diagnósticos que se arrebatan entre sí en los aeropuertos o las puertas de las fábricas chinas. Esa misma dinámica capitalista de búsqueda irrefrenable de ganancia hace imposible un acuerdo de los grandes institutos científicos de los países más adelantados para buscar de manera colaborativa una vacuna y remedios para esta enfermedad. Cada monopolio farmacéutico quiere producirla por sí mismo y así aumentar sus ganancias. Por estas razones, porque vivimos en un régimen capitalista, no se puede resolver de fondo la pandemia si no se cambian las relaciones de propiedad capitalista, de los monopolios y la gran burguesía, hoy día el mayor obstáculo para derrotar la pandemia.

Tucumán: entrevista a Cristian Luna, secretario general del SITE

ES— ¿Cómo ves la situación de la salud en la provincia?

CL— La situación de la salud en la provincia es una improvisación, una gran puesta en escena del gobierno de Manzur y su ministra de Salud, Roxana Chahla, no proveen de insumos de protección personal a los trabajadores en contacto con pacientes infectados ni entregan más respiradores y equipos, pero se la pasan sacándose fotos con “nuevas áreas para la atención del Covid-19”, como la del Hospital Avellaneda, que es una burla, viendo las fotos uno se da cuenta que ese sector jamás podrá funcionar como sala de coronavirus. No quieren invertir y descargan sobre los trabajadores de la salud la responsabilidad de enfrentar la pandemia. Convocaron a voluntarios sin formación ni insumos, una locura.

Nosotros estamos teniendo asambleas en varios hospitales con dos reclamos centrales: insumos de protección personal y licencias para los y las compañeras con patologías preexistentes. Se consiguieron algunos

traslados, pero dentro del hospital (de la atención del paciente ¡al lavadero! ¡otra locura!). Hay un proceso de autoconvocatoria de enfermería y otros sectores (camilleros, instrumentistas, administrativos). En cuanto a insumos, los dan con cuentagotas y no son los que corresponden. ¡Una vergüenza!

El gobierno de Manzur responde con amenazas, aprietes y traslados. El personal de salud no solo arriesga su vida, sino también la de su familia y su comunidad.

ES— ¿Qué rol están cumpliendo los gremios?

CL— Ramírez, de ATSA; Sánchez, de ATE, y otros sindicatos menores guardan silencio, y guardar silencio en esta situación es complicidad. Apelan a la moral y el sacrificio del trabajador de la salud, generar una mística, un gesto heroico, que es criminal, dejando a la deriva a los compañeros. Nosotros con SITE (Sindicato Tucumano de Enfermería) participamos y



motorizamos las asambleas, pero el proceso de autoconvocatoria es más amplio y excede las estructuras sindicales. Los compañeros y compañeras tomaron conciencia de que esta pandemia afecta en mayor grado (15%) a los que trabajan en salud.

ES— ¿Cómo está tu situación?

CL— Han vuelto a trasladarme, más lejos y aislado ahora. Creen que si me corren de participar de las asambleas no van a tener lugar. No quieren ocuparse realmente de la salud de la población, empezando por los que garantizan que esta atención llegue a todos y todas. Más allá de mi situación, seguimos peleando en defensa de la salud pública.



Proyecto de Ley de emergencia de salud pública

En octubre de 2019 la diputada Mónica Schlotthauer, Izquierda Socialista en el FIT Unidad, realizó una audiencia pública junto a trabajadores de la salud para presentar un proyecto de ley para la creación de un Sistema Nacional Único de Salud en el Congreso de la Nación. Cuyos artículos principales y atinentes a la situación actual reflejamos a continuación:

Art. 1. Creación del Sistema Nacional Único de Salud.

Art.3. Garantía de acceso y derecho a la salud para toda la población.

Para garantizar el derecho a la salud a toda la población se establecerá la gratuidad absoluta de todas las prestaciones quedando abolidos los bonos de cooperadora y toda otra forma de “recupero” y copago. Se instaurará el boleto sanitario gratuito para ir y volver del establecimiento. Se extenderá el horario de atención desde las 7 a las 21 horas con la adecuada dotación de personal.

Art. 7. Medicamentos gratuitos para toda la población.

La provisión de medicamentos será de carácter gratuito y universal y quedará a cargo del Estado nacional. A tal efecto se implementará la producción estatal de medicamentos a partir de instalaciones ya existentes en el ámbito público. Toda industria farmacéutica que cese en su producción será estatizada e inmediatamente integrada al sistema de producción pública de medicamentos.

Art. 7. De la política de contratación de los trabajadores de la salud.

[...] Quedan abolidas todas las formas de designación precaria de personal como becas, locaciones de servicios y otras. El personal que se hallare en esa situación pasará

en forma inmediata a la planta permanente del Estado nacional.

Art.13. Ley Nacional de Salud

A partir de la sanción de la presente Ley, en un plazo de 180 días se realizará un Congreso Nacional de Salud integrado por trabajadores de salud y la comunidad que elaborará un proyecto de Ley Nacional de Salud que prevea la incorporación del sector privado (sanatorios, institutos de diagnóstico y tratamiento y la industria farmacéutica) y las Obras Sociales sindicales y el PAMI al Sistema Nacional Único de Salud, de propiedad estatal, gratuito y de excelencia para todos.

Versión completa en www.izquierdasocialista.org.ar

CRISIS SOCIAL

El drama de la falta de comida en los barrios

Escribe **Diego Martínez**

En la Argentina viven, según datos de diciembre de 2019, 16 millones de personas en situación de pobreza y 3,6 millones de personas en situación de indigencia, es decir que no llegan a garantizar la comida y los elementos mínimos de subsistencia (datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA).

Esta situación se agravó desde la aparición del coronavirus. A la ya tumultuosa cifra de ocho millones de argentinos que se alimentaban diariamente en comedores barriales, se sumaron tres millones más que requieren de atención alimentaria. Se trata de cuentapropistas y trabajadores en negro que no cuentan con ningún ingreso, y al ver paralizadas sus actividades necesitan ser asistidos.

La comida no alcanza

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo en relación con la crisis de la comida que “la Argentina tiene una gran red social que está conteniendo la situación” (radio AM 750, 28/3). Los hechos demuestran lo contrario.

En los barrios del Gran Buenos Aires los vecinos hacen colas de hasta seis horas para recibir los bolsones de alimentos que se distribuyen a través de los municipios después de haber tramitado turnos por whatsapp o por teléfono que los habilitan para recibir la mercadería. Pero, una vez que se inicia la distribución, la cantidad de comida de la que se dispone es insuficiente. Muchos vuelven a sus casas con las manos vacías. En los últimos días las líneas telefónicas de



atención al vecino estaban colapsadas y los mensajes ya no eran respondidos. Como si esto fuera poco, en las redes se viralizaron videos en los que se observa cómo, mientras los vecinos hacen larguísimas colas para recibir bolsones que sirven para alimentarse apenas un par de días, los punteros del PJ se llevan grandes cantidades de comida para repartir por su cuenta de forma clientelar, e incluso para su consumo personal.

El alimento que se reparte en establecimientos escolares tampoco alcanza. En muchos casos la cantidad de bolsas es inferior a la matrícula. Debido a la desorganización, las escuelas se encuentran totalmente colapsadas en los días de entrega de mercadería y se generan grandes concentraciones de personas que ponen en riesgo la salud de todos.

Las raciones que reparte el ejército son absolutamente insuficientes. Hasta el momento solo lo hacen en Quilmes y La Matanza, donde entregan comida a 24.000 personas en un distrito donde residen un millón de pobres. El drama de la falta de alimento se repite a lo largo y a lo ancho del país.

¡Comida para todos y todas! ¡Que el gobierno se haga cargo!

En un país que produce alimentos para 400 millones de personas es vergonzoso que estemos viviendo esta situación. Si algo desnudó la crisis del coronavirus son las consecuencias sociales del modelo de entrega, saqueo y beneficio de las grandes patronales que impusieron todos los gobiernos (peronistas, radicales o de PRO) a costa

del hambre del pueblo trabajador argentino.

El ministro Arroyo dijo estar confiado en que la Argentina tiene una “gran red social de iglesias y organizaciones barriales que van a contener la situación social” (Télam, 28/3). Pero es el gobierno de Alberto Fernández el que tiene que hacerse cargo de garantizar la comida de los once millones de argentinos que la necesitan. Para ello se impone adoptar de forma inmediata medidas como la triplicación del ingreso familiar de emergencia, el aumento de los subsidios sociales y la creación de un fondo de emergencia basado en fuertes impuestos a los bancos, multinacionales y grandes empresarios, y en la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.

El estallido de la pobreza: once millones de personas para cobrar 10.000 pesos

Escribe **Guido Poletti**

El gobierno había “calculado” que serían 3,6 millones los que se inscribirían para recibir el monto de emergencia de 10.000 pesos para aquellos que no tienen ingreso alguno o revisten en las categorías más bajas del monotributo. La realidad le explotó en la cara, más de once millones de personas se apresuraron, casi desesperadamente, haciendo colapsar varias veces la página de internet para recibir ese monto que, como cualquiera puede darse cuenta, es absolutamente insuficiente. Y se supone que es “uno por núcleo familiar”. Esto ya obligó al propio gobierno a reconocer hasta el momento a 6 millones de personas como las habilitadas a cobrar los 10.000 pesos.

Nadie debería sorprenderse. Casi en el mismo momento se conoció la última medición de pobreza del Indec. Ahí se verificó que, a fines de 2019, se registraba un 35,5% de



pobreza, lo que numéricamente significaba 16,4 millones de pobres. De ellos, 8% son directamente indigentes (3,7 millones). El más doloroso es el caso de los niños y niñas de hasta 14 años, donde el índice de pobreza llegó a 52,3%, ¡más de la mitad de nuestros chicos son pobres!

Todos estos números sin duda están empeorando en medio de la pandemia. Por eso no resulta sorprendente que se anoten millones para tratar de conseguir un peso más ante la imposibilidad de acceder a comprar los alimentos y medicamentos más básicos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad reclamamos, ante este drama, un ingreso de 30.000 pesos para todos los que lo necesitan. El dinero para financiarlo existe, debe salir de un fondo de emergencia compuesto por un impuesto a las grandes empresas y riquezas y por lo que se ahorre con el cese inmediato del pago de la deuda externa.

DOCENTES

¿Qué hacer con la educación en cuarentena?

Escuelas cerradas, docentes trabajando, familias preocupadas

Escribe **Jorge Adaro**, secretario adjunto de Ademys

Con la cuarentena las escuelas se cerraron... pero los docentes seguimos enseñando. Quienes no tienen chicos en edad escolar poco conocen de la trama que estamos viviendo docentes, alumnos y familias en cuarentena. El gobierno, a través del ministro Trotta y los secretarios de Educación, como Soledad Acuña de CABA, dicen que “rápidamente se resolvió el problema de la educación en cuarentena a través de la educación virtual” y que “se demostró que haber capacitado a docentes y montado plataformas virtuales antes” es lo que lo permitió. ¿Cuál es la realidad?

Con la cuarentena los docentes rápidamente organizamos los llamados “planes de contingencia” donde preparamos materiales y textos en papel para que los alumnos puedan ir leyendo y estudiando en sus casas. Pero el gobierno largó una plataforma digital donde docentes debemos presentar nuestros trabajos educativos y los chicos, en sus casas, hacerlos. Además se abrió un sistema de clases virtuales y consultas por mail a los docentes. El gobierno anunció también un sistema de clases por televisión, aunque hasta hoy no funcionó. Este sistema es absolutamente insuficiente, flexibilizador y discriminatorio. Muchos chicos en edad escolar tienen celular, pero solo el 50% tiene internet en su casa, solo el 40% tiene computadora. Y millones viven hacinados. De esta manera quedan fuera de la

“educación virtual” los chicos más pobres, extendiendo más la brecha social y la discriminación educativa.

Los docentes debemos subir a las plataformas contenidos educativos (muchos desconocen cómo hacerlo), sufriendo también la insuficiencia de infraestructura virtual, los cortes y floja señal o la falta de wifi en casa, trabajar conviviendo con nuestra familia y debiendo responder a las preguntas de los alumnos o sus familiares a cualquier hora del día. Las madres y padres se quejan porque llega a sus hijos muchísimo material virtual que no entienden y no saben cómo ayudarles.

Por más que la tecnología debe ser utilizada para mejorar la educación, es impensable la educación sin docentes y alumnos interactuando en el aula. Para aprovechar la virtualidad, el gobierno debe garantizar ahora infraestructura para todos, docentes y alumnos, repartir notebooks, garantizar internet, elementos de formación tecnológica. El gobierno hace declaraciones aprovechando esta tremenda crisis sanitaria buscando instalar la virtualidad educativa como sistema permanente. Eso es parte del proyecto de reducir el presupuesto educativo, privatizar



más la educación, despedir docentes y reemplazarlos por “plataformas virtuales” con “coordinadores” o “facilitadores” superexplotados. Ya en varias provincias hay “secundarias a distancia” y otras plataformas.

Hoy, en medio de la pandemia, hay que apoyarse en la virtualidad y sus ventajas como una emergencia, respetando el trabajo docente. Pero hay que reclamar también que el gobierno garantice que lleguen los trabajos hechos en papel por los docentes a todas las familias que no tienen acceso a la red.

Cuarentena docente: una pelea contra los gobiernos y la burocracia

Escribe **Graciela Calderón**
Secretaria adjunta Suteba La Matanza

La suspensión de clases y la cuarentena de los docentes fue una verdadera pelea que tuvimos que dar para defender la salud de los niños, docentes, auxiliares y millones de familias. No bien se conocieron datos de la pandemia, Izquierda Socialista y los compañeros de Docentes en Marcha comenzamos a exigir que se suspendieran las clases para evitar la posibilidad de contagios masivos. Mientras, impulsamos que donde no se garantizaran insumos e infraestructura escolar necesaria, definiéramos con las familias el cierre provisorio de la escuela. La negativa del gobierno fue apoyada por la burocracia de Ctera y Suteba en la voz de Roberto Baradel: “Por dos muertos no vamos a suspender las clases en todo el país”, dijo.

Días después, el ministro de Educación Trotta decretó la suspensión de clases, pero “con los maestros asistiendo a las escuelas”. Este absurdo fue repudiado por la docencia que, apoyada por los sindicatos combativos, con diferentes medidas, evitó arriesgar su salud. Finalmente, se declaró la cuarentena social para todos. Pero el gobierno insiste en que los docentes tengamos que romper la cuarentena.

Muchos gobernadores, respaldados por la burocracia Celes-te y algunas agrupaciones, piden que los docentes (y auxiliares) vayamos “voluntariamente” a realizar diferentes tareas con las escuelas abiertas, como armar bolsones de comida o de mate-



riales escolares, o hacer listados. Larreta, por ejemplo, aprovecha la pandemia para declarar la educación como “servicio esencial” para después ir contra el derecho de huelga. Y obliga a los docentes tercerizados de jornada extendida a que vayan a colaborar a los hoteles donde familias deben hacer cuarentenas por el coronavirus y, si no van, no cobran. También Kicillof, aprovechando que casi 30.000 docentes no pudieron tomar cargos porque se suspendieron los ofrecimientos por la cuarentena y no cobran nada, lanzó un programa que dará a estos docentes \$10.000 míseros, con la condición de que vayan a “tareas en las

escuelas”, rompiendo la cuarentena. Se los quiere enviar a armar bolsones de comida y repartirlos en las escuelas a centenares de familias que van a retirarlos, sin insumos de seguridad ni aislamiento. Así, además de arriesgar su salud y la de su familia, se compromete la de las madres y padres que se amontonan en las escuelas. Encima, una fuerte denuncia de docentes y padres es que en general los bolsones son minúsculos y no alcanzan para las familias que van, generando mucho malestar.

Izquierda Socialista, Docentes en Marcha, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo combativo hemos rechazado que los gobiernos quieran usar a los docentes para tareas no educativas, arriesgando su salud. Entendemos y compartimos el sentimiento de solidaridad de la docencia para con sus alumnos y familias. Por eso reclamamos que sea el gobierno, provincial o municipal, quien reparta los bolsones, casa por casa, garantizando los materiales de seguridad para los que lo realicen. Y exigimos que se aumente el número de bolsones y la calidad y cantidad de insumos y alimentos de cada uno para que alcance para evitar el hambre en cada familia mientras dure la cuarentena.

El gobierno es el responsable de la salud, la seguridad, el cobro de salarios, ayuda social y la alimentación de todos, los docentes, los trabajadores y el pueblo y las familias. Con el fondo de emergencia, con la plata de los empresarios y de la deuda externa lo tiene que garantizar.

Postergan el inicio en las universidades nacionales: necesitamos medidas de fondo

Desde la Juventud de Izquierda Socialista criticamos cómo, ante la pandemia, las autoridades universitarias lanzaron un fallido, inconsulto e improvisado sistema de “clases virtuales”. Señalamos qué requisitos son necesarios para pensar algún tipo de “normalización” cuando el retroceso de la pandemia así lo permita; y nuestra propuesta de que del fondo de emergencia económica que nuestro país necesita para enfrentar la crisis del coronavirus también se contemple una partida de emergencia para el sistema universitario.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), recomendó a las universidades aplazar la fecha de inicio de las clases del 13 de abril, generando en algunas un corrimiento de las clases presenciales hasta al menos junio. Las resoluciones adoptadas nada dicen sobre cómo se va a garantizar una cursada con condiciones de seguridad e higiene para reunir a miles de estudiantes en pleno otoño e invierno y con la pandemia del coronavirus azotando a nuestro país y el mundo como prevén los especialistas.

Flexibilización laboral solapada

Paralelamente se observa la pretensión de avanzar en la flexibilidad laboral de la mano del “teletrabajo” que veneran el gobierno, las patronales, la Federación Universitaria Argentina (FUA, dirigida por la UCR) y las gremiales docentes conducidas por el oficialismo peronista. Como Feduba de la Conadu que sacó un



infograma dando los “pasos” para disfrutar del trabajo desde la casa a sus afiliadxs.

Las primeras semanas de dicho cursado virtual han sido en gran medida fatídicas. Desde la UNC, por ejemplo, surgen numerosas denuncias del colapso de las “aulas virtuales”, reclamos de estudiantes por la dificultad de cumplir con las tareas domiciliarias dispuestas, así como también las amenazas de perder la regularidad por dificultades para conectarse en los horarios requeridos. Por su parte, lxs docentes señalan que se ven obligadxs a estar 24 horas pendientes de las consultas. En la UNLP también ocurrieron hechos como la expulsión y abandono a su suerte de lxs estudiantes que vivían en el Albergue Universitario.

Necesitamos soluciones de fondo

La SPU sugiere dictar los dos cuatrimestres entre junio de 2020 y marzo de 2021. Reiteramos que, más que poner fechas de “normalización” que nadie sabe si van a poder cumplirse, las universidades deberían estar preocupadas por acompañar los reclamos que emergen del sistema de salud. En lo que hace al ciclo lectivo, decimos que deben prorrogarse vencimientos de materias y finales, regularidades, inscripciones y todos los trámites burocráticos que tienen las universidades.

Por otro lado, señalamos que no puede ocurrir ningún tipo de normalización de la cursada sin acuerdo y debate democrático con la comunidad de cada una de las universidades, y hasta que las condiciones de preservación ante la pandemia así lo permitan. También afirmamos que es necesaria una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar un aumento de las becas, en su cantidad y monto; también partidas extraordinarias para garantizar las condiciones de infraestructura, recursos higiénicos, presencia de profesionales de la salud, y demás recursos necesarios para preservar a la comunidad universitaria.

Dichos recursos deberían salir, como proponen Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda- Unidad, de un fondo de emergencia construido en base a impuestos a las grandes empresas y multimillonarios, así como también del cese del pago de la deuda externa que el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido incluso en medio de la cuarentena.

Juventud de Izquierda Socialista

SINDICAL

El acuerdo de la burocracia con las patronales

Escribe **Martín Fú**

La burocracia sindical está pactando con las patronales, con el argumento de la profundización de la crisis provocada por el coronavirus, rebajas salariales, suspensiones y despidos y el levantamiento de la cuarentena. Se colocan así como un virtual aliado de los empresarios, quienes siguen presionando día a día para seguir priorizando sus ganancias a costa de las necesidades del pueblo trabajador y poniendo seriamente en riesgo la salud de estos.

Hace una semana, el presidente Fernández hizo un fuerte elogio de Hugo Moyano: “un dirigente gremial excepcional”, lo describió en la “cuarta inauguración” del sanatorio Antártida. Dicho encuentro fue seguido por otros con el resto de la burocracia de la CGT y, a posteriori, por la reunión de la propia CGT con la UIA.

Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, ya le habían llevado al presidente Alberto Fernández las exigencias de la Unión Industrial Argentina y los empresarios. Como lo aclaró el propio Daer “La idea es, a partir del 13 de abril, volver a poner en marcha sectores de la economía”. (Página 12, 3 de abril).

Los dirigentes sindicales cegetistas se alinean no sólo en el pedido del levantamiento de la cuarentena, sino que también terminan aceptando el argumento de las rebajas salariales y las suspensiones y despidos,

más o menos encubiertos. Planteos como “los turnos rotativos”, con la excusa de evitar la aglomeración en los transportes, terminan siendo argumentos a medida de las patronales, que habilitan así la mayor flexibilización laboral.

En medio de la pandemia estos acuerdos de la burocracia con las patronales, totalmente a contramano de lo que realmente necesitan los trabajadores, contrastan con la pelea que está realizando el sindicalismo combativo y otros sectores opositores.

Así tenemos los ejemplos de los ferroviarios del Sarmiento, que se plantaron frente a la patronal que no le entregaba los insumos mínimos de seguridad y pretendía que concurran a trabajar todos los ferroviarios sin respetar los que son realmente esenciales para el servicio. O la de los trabajadores de la salud, tanto de la Cicop como del SITE (sindicato tucumano de enfermería) de Tucumán, que denuncian todas y cada una de las carencias del sistema mientras permanecen en la primera línea de la pelea contra la pandemia.



Se multiplican los ejemplos de los trabajadores que reclaman y resisten los abusos de las patronales que utilizan al coronavirus como excusa, o que priorizan sus ganancias antes que la salud de los trabajadores. Ante una burocracia que los deja solos, y pacta con las patronales, es más necesario que nunca pelear por otro modelo sindical, democrático y combativo, que escuche y responda a los reclamos de la base como lo venimos haciendo desde el sindicalismo combativo.

Muerte en el Mercado Central por negligencia patronal

Escribe **Olga Ortigoza**, dirigente del Suteba La Matanza

Dolor e indignación se sintió en los hogares de La Matanza al enterarnos que un trabajador del Mercado Central, oriundo de La Tablada y de tan solo 41 años moría por efecto del coronavirus.

Es que uno de los gerentes de la empresa Cruz del Sur había llegado a mediados de marzo desde Chile sin respetar la cuarentena tomando contacto con los trabajadores sin ningún tipo de protección. Los trabajadores venían reclamando insumos de protección personal y la empresa no les daba respuesta. Cuando se enteraron que uno de sus compañeros estaba infectado por el virus pidieron que las instalaciones de la empresa en el Mercado se cierren hasta que se haga una desinfección total, pedido que fue desconocido por la patronal, como así también por los delegados

del gremio de camioneros. Actualmente hay otros trabajadores de la empresa que están internados, posiblemente también infectados con Coronavirus. El municipio, encabezado por Fernando Espinoza, al enterarse de la situación no tomó ninguna medida al respecto.

Desde Izquierda Socialista hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del trabajador fallecido y repudiamos a la Empresa Cruz del Sur que, como en otras empresas, presionan a sus trabajadores para que trabajen sin las mínimas condiciones de seguridad; y muchos de ellos sin respetar la cuarentena con tal de mantener sus ganancias. Exigimos al gobierno municipal, provincial y nacional que tomen cartas en el asunto, controlando el accionar de las empresas y sancionando fuertemente a quienes incumplan estas medidas.



NOTICIERO SINDICAL

No a las rebajas salariales en Mc Donalds

En el medio de la crisis del coronavirus la multinacional estadounidense decidió pagar solo entre 2.000 y 2.500 pesos a cada empleado y quitar beneficios como el presentismo. En 2019 Mc Donalds tuvo una ganancia mundial de 6.500 millones de dólares y en la Argentina vendió en el mismo año 150 millones de hamburguesas en sus 227 locales. Como se ve, la empresa no puede aducir problemas económicos para pagar salarios. Actualmente la empresa sigue trabajando bajo la modalidad delivery. Como si no alcanzara con descontar brutalmente los sueldos la patronal obliga a los trabajadores a hacer cursos por internet amenazando con sancionar a quienes no los realicen.

Lo que sucede en Mc Donalds, también se repite en las cadenas multinacionales como Burger King, Mostaza, Wendys y KFC y son un reflejo de las condiciones de precariedad absoluta en la que trabajan miles de jóvenes en el país en empresas como Rappi, Glovo y los call centers.

Nos solidarizamos con los trabajadores de Mc Donalds y del resto de empresas, repudiamos la rebaja salarial y el ataque a sus derechos. ¡Que la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores!

Tucumán: trabajadoras de Desarrollo Social no cobran

Los trabajadores de diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social están cansados, de la tercerización, contratos de locación de servicios y al trabajo en condiciones precarias se suma la falta de pago de los sueldos. En la mayoría de los casos la mora alcanza tres meses. Cuando no se pagaba enero ni febrero la culpa era de la crisis económica provincial. Ahora, de la pandemia. Un grupo de trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia no cobra sus sueldos desde julio de 2019. Esta situación se repite en otras áreas dedicadas al cuidado de niños en situación de riesgo y adolescentes en conflicto con la ley. No tienen obra social ni ART, teniendo que desarrollar visitas a barrios periféricos corriendo riesgos de agresiones, robos, etcétera, sin ninguna protección ni cobertura. Se está desarrollando un fuerte proceso de auto convocatoria con el silencio cómplice de los dirigentes de ATE y UPCN, que dejan solos a los trabajadores.

Ferrocarril Belgrano Sur suspendido por caso de coronavirus

El servicio se encuentra interrumpido debido a que una enfermera que realiza tests de alcoholemia a los trabajadores del ferrocarril presenta síntomas de coronavirus. Se trata de un claro caso de negligencia de la patronal que en el medio de la pandemia dispone que se sigan realizando ese tipo de tests, lo que supone un contacto estrecho entre la enfermera y los trabajadores. Alrededor de 162 empleados, entre guardas y conducto-



res de la línea tuvieron contacto con la enfermera, con la gran posibilidad de contagio que esto implica. Actualmente todos ellos se encuentran aislamiento y seguimiento ambulatorio.

Por otro lado se ven perjudicados por esta situación los seis mil trabajadores que realizan tareas esenciales y seguían utilizando el servicio, la mayoría de ellos viven en zonas donde el único ferrocarril que circula es el Belgrano Sur. Otro caso de negligencia patronal que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, política que deja correr la burocracia de la Unión Ferroviaria. Opuesto a lo que hace el sindicalismo combativo, como los ferroviarios del Sarmiento que impusieron con peleas a la patronal que disponga insumos, guardias mínimas y que no se realicen los tests de alcoholemia para preservar la salud de los ferroviarios.

Despidos y rebaja salarial en la zona sur

Varios casos de despidos, rebaja salarial y aprietes de distintas patronales se han sucedido durante la cuarentena en la zona sur del conurbano. En el frigorífico Penta, en Quilmes, la patronal cerró sus puertas y dejó a 250 familias en la calle luego del intento de despido de la comisión interna y de veinte delegados. Los trabajadores permanecen cortando Camino General Belgrano en la puerta del establecimiento. En Dánica la empresa despidió a cinco trabajadores aduciendo que se negaron a trabajar horas extras, mientras debe dinero de los sueldos. Los trabajadores realizaron un paro, luego se dictó la conciliación obligatoria y ahora están a la espera de que la patronal decida si acatar o no. En Danone (La Serenísima) la patronal intenta aplicar una reducción de 40% en los sueldos mientras sigue produciendo. En Mascardi la patronal no abonó los salarios de marzo. El lunes 6 las líneas 540 y 553 del Grupo DOTA realizaron un cese de actividades por el pago incompleto del salario y, ante la contundencia de la medida, la patronal finalmente pagó lo adeudado. Estos abusos abren con todo la pelea para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los capitalistas.

Jorge Macri precariza y despide

El jefe de gobierno de Vicente López, uno de los municipios más ricos del país, despidió a más de 30 trabajadores

del área de Seguridad, quienes realizan tareas de monitoreo o manejan los móviles del municipio. Fueron notificados por email, whatsapp o llamados telefónicos, una informalidad que se refleja en los contratos a 90 días, renovables o no, que Macri somete a casi la totalidad de los empleados municipales. Entre los despedidos había trabajadores con licencia médica o lactancia. Luego denunciar públicamente los despidos y la precarización, el intendente dio marcha atrás y prometió mantener el vínculo laboral por 60 días más.

Crisis en el puerto de Mar del Plata

Las pesqueras Angelito, Silomar y otras, no volverían a abrir luego de la cuarentena. Esto se suma a los más de 500 obreros de la pesca que perdieron su trabajo en los últimos meses. Trabajadores del puerto de Mar del Plata denunciaron que el gobierno no tiene contemplada ninguna ayuda para los obreros de la industria pesquera marplatense y que la situación en el sector es cada vez más crítica.

Curtiembre Sadesa despide

La empresa de la familia Galperin, Marcos es dueño de Mercado Libre, ha enviado sendos telegramas de despidos, a hacerse efectivos desde el 5 de abril, es decir, violando el decreto del ejecutivo que prohíbe los despidos y suspensiones.

Acumar: que se pague lo adeudado y se respete la cuarentena

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Infraestructura, viene hostigando a las cooperativas de trabajo que cumplen tareas en los márgenes del Riachuelo a que se reincorporen en sus labores. Es una irresponsabilidad completa que atenta contra la salud de cientos de compañeras/os. Y lo hacen a sabiendas de que está vencido el convenio y hay un atraso de un mes en el pago de las partidas dedicadas a insumos, transporte, seguros, etcétera. Exigimos que se pague lo adeudado, se renueve el convenio y se revierta la postura de romper la cuarentena.

A siete años de la inundación en La Plata

El pasado 2 de abril se cumplió el séptimo aniversario de esa tragedia evitable. Las asambleas de inundados hicimos un recordatorio diferente debido al aislamiento social, fue virtual y difundido por las redes sociales. Hicimos un video donde leímos un documento, se mostraron imágenes de aquel momento y se agregó el listado de las víctimas.

Recordamos cómo el estado abandonó a los vecinos, que nos ayudamos unos a otros. El juicio a los responsables fue una muestra de impunidad, donde Scioli y Bruera ni siquiera fueron acusados, y cómo el intendente Garro miente con las obras diciendo que ya podemos dormir tranquilos, cuando estudios que él mismo encargó a la UNLP dicen lo contrario.

Las asambleas de inundados recordamos esta triste jornada y renovamos nuestro compromiso para continuar la lucha.

Neuquén: emergencia sanitaria para todos

Escribe **Mariano Barba**

Al igual que en el país y en el mundo, en Neuquén se están tomando medidas políticas, sanitarias y económicas. Aquí se toman desde el Comité de Emergencia que constituyó el gobierno. Desde el FIT Unidad, nuestros dos diputados provinciales y dos concejales salieron al cruce de las medidas anunciadas por el gobierno por considerarlas totalmente insuficientes. En los barrios crece la queja por la parálisis de las changas y la falta de alimentos. Ni hablar de los artículos de higiene y prevención. En ese sentido Angélica Lagunas, desde su lugar de concejala, se puso a la cabeza de presentarle al Comité de Emergencia los listados diarios que preparan las docentes desde sus casas con las familias que requieren ayuda alimentaria.

También lo que se sufre en la provincia es el control de la policía, prefectura y gendarmería sobre todo aquel que transita. A tal punto que este lunes fueron detenidos y golpeados varios militantes del Polo Obrero en la ciudad de Zapala por reclamar que se entreguen los módulos de alimento anunciados por el gobierno, entre ellos al Secretario Adjunto de Aten Zapala que acompañó la protesta.

El gobierno, para legalizar su accionar, convocó a sesión extraordinaria en la legislatura y en el concejo deliberante de la capital. En ambas instancias el FIT Unidad denunció que el objetivo central del ejecutivo provincial y del municipal -ambos del MPN- no era presentar un verdadero plan de emergencia



sino hacer votar la autorización para un gran endeudamiento, que llegará a los 140 millones de dólares y con las manos libres para gastarlos a piacere. Con algunos retoques, el Frente de Todos y el Pro, aprobaron el proyecto del oficialismo.

Ante esta maniobra, Angélica Lagunas, nuestra concejala, presentó, junto a Natalia Hormazábal, un proyecto acordado

en el FIT Unidad exigiendo medidas concretas y de fondo, como lo son:

- Constituir un fondo de emergencia proveniente de “adelantos de la coparticipación nacional, y de un impuesto extraordinario a la empresas radicada en el parque industrial, que son en su mayoría multinacionales de servicios petroleros, además de a las cadenas de grandes hoteles y grandes superficies comerciales”.

- Establecer “un régimen especial para los trabajadores de la salud con todo el equipamiento adecuado para su cuidado para que puedan atender sin contagiarse; y otorgándole un incremento salarial de 30.000 pesos” y no los 5.000 miserables otorgados hasta ahora.

- Prohibición de despidos y suspensiones en todas las empresas radicadas en la provincia.

- Abastecimiento de agua potable y raciones alimenticia para los sectores desprotegidos de los barrios y para las recientes tomas de tierras que suman miles de familias.

- Poner bajo administración estatal todos los recursos de la sanidad privada para integrarlos a la red sanitaria de la ciudad y la provincia.

MUJERES

La violencia de género, no entra #EnCuarentena

Escribe **Mercedes Trimarchi** Diputada bonaerense
por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En 2019 hubo 327 femicidios y trans-travesticidios en el país. Producto de ello, 235 niñas quedaron sin su cuidadora responsable. El 67% de los casos fueron las parejas o ex-parejas los femicidas. Otro dato es importante, en la mayoría de los casos (63%) el femicida convivía con la víctima. En 2020, este escenario no cambió y hubo unos 86 femicidios según el observatorio “Ahora que sí nos ven” que solo registra los casos que salen en los medios. Marzo cerró con 24 femicidios y como consecuencia de ellos, son 23 niños y niñas que perdieron a sus mamás. El lunes pasado en la localidad bonaerense de Escobar, Jerónimo Cruz mató a su pareja María Yusco de 45 años, delante de su hija de siete años.

Según un informe de ONU-Mujeres, la violencia de género aumenta durante el aislamiento, el encierro y la cuarentena. De hecho, ese mismo organismo instó a los gobiernos de todo el mundo a que tomen medidas específicas para asistir a las víctimas. En Argentina, a través del Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros poco están haciendo al respecto, más que insistir en que las mujeres deben hacer la denuncias. Pero lo que omite el gobierno de Alberto Fernández es que quienes trabajan en la línea 144 de atención a las víctimas de violencia



cia de género, lo hacen de manera totalmente precarizada. Es más, son quienes vienen reclamando condiciones de higiene y seguridad en su lugar de trabajo y que les paguen las horas extras que realizan ya que desde el inicio de la cuarentena las llamadas aumentaron en un 30%.

Frente a este panorama es urgente que se declare la emergencia en violencia de género con presupuesto para combatirla. Esto es fundamental, porque frente al aumento de las denuncias lo que falta son políticas públicas que solucionen esta problemática. Por ejemplo, para escapar de una situación extrema de violencia en donde corre peligro la vida de una mujer, tiene que haber un refugio al cual recurrir. A su vez, a cada una se le debe garantizar la atención psicológica y el asesoramiento legal gratuito, al igual que a las niñas y niños que también fueron víctimas del círculo de la violencia. Otra cuestión fundamental es darle una solución habitacional para las víctimas de violencia de género, ya sea mediante las habitaciones de los hoteles en desuso, la utilización de las viviendas ociosas (donde no vive nadie) o sacando de los hogares a los violentos. Estas medidas mínimas y urgentes como también deberían ser los subsidios económicos para no depender materialmente de los violentos, deben tener una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país. Estas son algunas de las propuestas que se deberían tomar de carácter urgente para ayudar a las víctimas de violencia de género. Por eso insistimos en que no nos engañen más, sin presupuesto no hay un combate serio a la violencia de género.

DEBATE

Pandemia del Covid-19: El mundo capitalista en crisis, ¿cuál es la salida?

En medio de la pandemia, los trabajadores y pueblos del mundo sufren contagios y muertes, despidos y más pobreza. Los gobiernos imperialistas y capitalistas, sean del color que sean, siguen aplicando ajustes brutales. Algunos de ellos empiezan a postular un “capitalismo ético” para evitar una catástrofe mayor. Cada vez se hace más evidente que la alternativa es socialismo o barbarie capitalista.

Escribe **Francisco Moreira**

“El mundo quedará absolutamente transformado”. Esta frase profética la dijo Martin Wolf, columnista estrella del más importante diario financiero del mundo, The Financial Times. Es que ya a nadie se le escapa la gravedad de la crisis capitalista, profundizada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Hoy millones de personas están viviendo en cuarentena. Se superó ya largamente el millón de infectados y hay casi 100.000

muerdos en el mundo, lo que puso en evidencia el colapso de los sistemas de salud tras años de políticas de ajuste y recortes presupuestarios por parte de todos los gobiernos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a comienzos de la pandemia, había anunciado que en el mundo habría 25 millones de nuevos desempleados por la profundización de la crisis económica. El cálculo que hace ahora es que se perderán entre 195 y 230 millones de puestos de trabajo (solo en Estados Unidos ya se reportaron casi 10 millones). Los



despidos y suspensiones instrumentados por las empresas para sostener sus márgenes de ganancia aumentan la pobreza y dejan desamparados a millones de trabajadores y sus familias en medio de la pandemia.

Ante tamaña crisis algunos gobernantes y sus voceros han ido a criticar a los líderes del mundo “por sus errores” y se

han apresurado a anunciar que, de continuar este “capitalismo salvaje” es inevitable un horizonte catastrófico para la humanidad. El mismo Wolf afirma que “millones de personas van a estar en la más desesperada situación social, económica y psicológica” y prenuncia “una catástrofe de la que acaso no nos recuperemos realmente por décadas”. En contrapartida, postulan la necesidad de un “capitalismo ético”.

Los gobiernos capitalistas siguen aplicando brutales ajustes

Pero la experiencia de los pueblos del mundo informa que el “capitalismo ético” no existe más que en la cabeza de quienes lo postulan. Desde comienzos de 2019 había una oleada de luchas de los pueblos del mundo contra los paquetes de ajuste y recortes en derechos democráticos, instrumentados por los gobiernos imperialistas y capitalistas. La irrupción de la pandemia aumentó el descrédito de los gobiernos porque, pese a sus diferencias, todos siguen empeñados en aplicar paquetes de ajuste. Quienes claman por un “capitalismo ético” donde, por ejemplo, “el FMI preste ayudas económicas”, ya recibieron su respuesta: “El FMI está para proteger el estado de la economía mundial”. Es decir, va a seguir saqueando a los países pobres del mundo.

No hay “errores”. Detrás del ocultamiento inicial de la epidemia por parte de la dictadura capitalista china o su negación por los gobiernos imperialistas, como el de Trump o Boris Johnson (Gran Bretaña), hay una raíz común: mantener las políticas de saqueo, ajuste y explotación capitalistas. Es la misma política que adoptaron gobiernos como el del reaccionario Bolsonaro. También es la política que intentan esconder detrás de su doble discurso gobiernos “progresistas”, como el de Alberto Fernández, que afirman la necesidad de “conciliar la economía con las cuarentenas” mientras permiten despidos, suspensiones y no detienen la sangría de las deudas externas.

Hay una salida: que la crisis la paguen los capitalistas

Desde la izquierda decimos que hay una salida posible para los trabajadores y pueblos del mundo, que no están condenados de antemano a sufrir los efectos de la crisis. Llamamos a retomar las luchas y rebeliones contra los planes de ajuste que aplican los gobiernos imperialistas y capitalistas. Decimos ¡que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Resulta cada vez más necesario y urgente impulsar un

plan global de emergencia anticapitalista y socialista. Exigir fondos de emergencia sanitaria, que salgan de altos impuestos progresivos a los grupos empresarios, al capital financiero y que se dejen de pagar las deudas externas. Que se aumenten los presupuestos de salud para atender la emergencia sanitaria. Es necesaria una reorganización general de la producción en función de las necesidades de la emergencia sanitaria bajo control obrero.

Que las empresas y los de arriba se hagan cargo de la crisis del coronavirus. Ningún despido o suspensión y que nadie se quede sin su salario durante la cuarentena. Reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores. Implementación de un seguro al desocupado y al monotributista.

No existe en el mundo ningún gobierno imperialista o capitalista que esté dispuesto a llevar este programa hasta el final. No existe un “capitalismo ético”. Por eso, ante el desastre provocado por los ajustes y recortes aplicados por los gobiernos de todo el mundo se impone luchar por gobiernos de trabajadores que den urgente respuesta a las necesidades populares. Más que nunca la alternativa es socialismo o barbarie capitalista.

INTERNACIONAL

Estados Unidos: las protestas en la pandemia

Escribe **Adolfo Santos**

La pandemia causada por el Covid-19 está generando nuevos escenarios políticos. Aunque tendremos que aguardar el fin de esta crisis para poder sacar mejores conclusiones, es evidente que, más que en épocas normales, los gobiernos y sus políticas son colocados bajo la lupa por las consecuencias que acarrearán. Algunos datos que recibimos de los Estados Unidos, aunque en pequeña escala, nos permiten percibir que, a pesar del confinamiento, existe un movimiento de protesta, sobre todo en defensa de la salud y de la vida de la población trabajadora.

No es que antes de esta crisis no haya habido conflictos. Recordemos la histórica huelga de los trabajadores de General Motors en 2019, o la de los docentes. Más recientemente, los mineros del cobre de Asarco, en los estados de Texas y Arizona, estuvieron en huelga varios meses, también los estudiantes de posgrado de la UC Santa Cruz, en California, y los hoteleros de Chicago. Pero lo que a la distancia se puede observar en estos momentos es una extensión de la protesta a amplios sectores que se manifiestan contra las pésimas condiciones de trabajo, que no garantizan la seguridad sanitaria.

La extensión desmedida alcanzada por el coronavirus en los Estados Unidos por la política del “negacionista” Trump, que demoró en tomar los recaudos a tiempo, generó una gran reacción. Las huelgas y acciones de protesta adoptadas por los trabajadores que tomaron conciencia del peligro fueron en aumento. El martes 24



de marzo, después de que un mecánico dio positivo en el test de coronavirus, más de la mitad de los trabajadores de Bath Iron Works, un astillero de Maine, no fueron a trabajar y le exigieron a la empresa que tome medidas de seguridad.

Hay muchos relatos sobre este movimiento. En Warren, Michigan, los trabajadores se retiraron de una planta de camiones de Fiat-Chrysler porque no había agua caliente para lavar los platos. En Alberta los conductores de autobuses de Birmingham se declararon en huelga por la falta de protección contra el coronavirus ante el riesgo de transportar pasajeros infectados. Los choferes de Detroit hicieron un paro por la

misma razón. Los trabajadores de la sanidad de Pittsburgh, Pensilvania, pararon preocupados por la pandemia. Otro tanto hicieron los camioneros de Memphis y los farmacéuticos de West Virginia, los repartidores de alimentos y de Amazon, los de los supermercados Whole Foods, o los carpinteros del área de Boston, que organizaron un paro el 7 de abril. A esto le podríamos agregar los cacerolazos de las protestas en Nueva York.

Para algunos, aún puede ser un movimiento pequeño para conmover al gobierno de Trump, sin embargo, creemos que puede tener mucha importancia en la post pandemia. Como en toda gran crisis, los millonarios han acudido rápidamente a apoderarse de los miles de millones que el gobierno republicano ha colocado a disposición para paliar los efectos del coronavirus. Sin embargo, los Estados Unidos saldrán de esto con uno de los mayores ejércitos de desocupados, subocupados y precarizados, que exigirán empleo, salario y servicios sociales. Es evidente que los ricos, que se adueñaron de los créditos oficiales, destinarán una porción ínfima de ese dinero para atender a los trabajadores. En ese marco, la protesta puede aumentar y no debemos descartar que el coronavirus acabe actuando como verdadero motor de la lucha de clases en los Estados Unidos.

El coronavirus debilita a Bolsonaro

En las últimas semanas la crisis política en Brasil se ha venido agudizando. Bolsonaro intentó desplazar al ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, pero finalmente debió dar marcha atrás ante la presión dentro del propio gobierno. La designación del general Walter Braga Neto como ministro de la Casa Civil refuerza la idea de una creciente influencia del sector militar en el gobierno. Tanto es así que algunos analistas políticos se preguntan quién gobierna realmente.

Escribe **Adolfo Santos**

El debilitamiento de Bolsonaro es evidente. En su último pronunciamiento público, presionado por el rechazo a sus propuestas, tuvo que ser menos ofensivo. Es la crisis de un presidente aislado. De los líderes mundiales “negacionistas” es el único que continúa minimizando la gravedad de la pandemia. Mientras Trump, su gurú, comienza a hacer importantes inversiones para evitar la crisis social, Bolsonaro sigue sin darle importancia al problema y amenaza permanentemente en decretar el fin de la cuarentena establecida por los gobernadores.

No es casual que los cacerolazos continúen en todo el país que, desde el 18 de marzo, no han dejado de crecer. El más grande fue el día que hizo su pronunciamiento público. Esa indignación también se expresa en las encuestas. El 42% considera a la gestión del presidente “ruin o pésima” y, por primera vez, el apoyo quedó por debajo de 30 por ciento. Lula, el PT y otros opositores salieron a plantear la renuncia del presidente, más allá de que no empujen ninguna medida para llevarla adelante. Bolsonaro tuvo que reconocer que no tiene el apoyo necesario para decretar la reapertura del comercio. El gobierno quería insuflar a su base alegando que la población pasaba hambre por causa de la cuarentena, que no la deja salir a trabajar. Sin embargo, importantes sectores comienzan a ver que el gobierno no hace nada para acabar con el hambre pero, mientras tanto, sigue creciendo el número de muertos e infectados por el coronavirus.



Las medidas de ajuste no pararon

Apoyadas en medidas provisionales editadas por el gobierno para unificar a la patronal detrás de sí, las empresas vienen proponiendo reducción de sueldos, suspensión de contratos y de aportes laborales. Ahora están preparando un proyecto para atacar a los servidores públicos con un recorte salarial. En vez de atacar a los banqueros y grandes empresarios, el gobierno avanza con una campaña para exigir el sacrificio de los empleados públicos que, supuestamente, estarían ganando mucho.

Aún no ha surgido una oposición con una política alternativa capaz de enfrentar al gobierno. Los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro, dos figuras nefastas de la derecha brasileña, antiguos aliados de Bolsonaro, apenas se han despegado de él para evitar hundirse juntos. Las principales centrales sindicales no van más allá de notas críticas, no organizan una lucha consecuente, inclusive, en algunos casos han hecho acuerdos con las patronales para reducir los salarios. En muchos lugares, sobre todo en los hospitales, sectores de base se han organizado por fuera de los sindicatos para defender sus derechos y la protección de la salud en el trabajo.

En este marco, la pequeña central sindical CSP Conlutas consiguió en la importante región del Valle de Paraíba/SP que el 80% de los trabajadores permanezcan en sus casas sin reducción salarial. Los compañeros de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), sección hermana de Izquierda Socialista, que forman parte de esa central, manifestaron: “Es fundamental organizar la lucha contra el ajuste del gobierno y los patrones, del colapso de la salud pública y de las condiciones de trabajo. Es necesario movilizarnos, independientemente de estar en cuarentena. Esa es la única forma de derrotar los ataques. En ese proceso debemos exigir la suspensión del pago de la deuda y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas para volcar esos fondos a la salud pública y demás necesidades populares y continuar luchando por fuera Bolsonaro”.

La pandemia en un Chile convulsionado

Escribe **Rainier “Oso” Ríos**, dirigente del MST, sección chilena de la UIT-CI

Piñera respiró aliviado al saber que el coronavirus había entrado en el país. Desde el 18 de octubre del año pasado su gobierno no lograba detener la crisis política abierta por masivas manifestaciones. Marzo prometía no ser un mes tranquilo: el día 8, con cuatro millones de mujeres en las calles del país, volvió a calentar los motores de la protesta.

Correctamente, las asambleas territoriales y la primera línea, las organizaciones feministas y estudiantiles, junto con otras organizaciones sociales, decidieron suspender las manifestaciones para poner todos los esfuerzos en superar la pandemia. Piñera, por su parte, ha tratado de aprovechar la tragedia para rearmar su tambaleante gobierno. La suspensión de las movilizaciones, sin embargo, no promete un panorama alentador para el capitalismo chileno. El colapso del sistema de salud se acerca a pasos agigantados, mientras suben los contagios y escasean insumos e infraestructuras

médicas. Décadas de privatizaciones y bajos presupuestos han preparado la debacle de una salud pública que se cae a pedazos. Enfermarse y no tener atención médica, ver morir a familiares por falta de respiradores, no hacen buena combinación con un pueblo que ha sostenido por meses la lucha contra el gobierno.

Como telón de fondo, economistas patronales y autoridades del gobierno vaticinan que la crisis económica recién comienza a mostrar sus garras. En el mejor de los casos, dicen, será parecida a la crisis de comienzos de la década del 80, la misma que provocó la ola de descontento contra la dictadura de Pinochet. Pronóstico nada alentador para un gobierno formado por defensores públicos del dictador.

Pandemia, desastre del sistema de salud, despidos masivos y reducciones de salarios servidos en el plato profundo de la desigualdad en Chile. Acompañados, como no, de la privatización de derechos sociales básicos, jubilaciones de miseria y una constitución impuesta a sangre y fuego por Pinochet. “Si no hay para los pobres, no habrá paz para los



ricos”. A cuadras de la Moneda esta frase pintada le recuerda al presidente que el pueblo al que no ha podido derrotar comienza a sufrir nuevas penurias. Piñera respira aliviado... mientras come de un plato que, sabe, no podrá terminar.

Ecuador: en las calles se respira la tragedia

Escribe **Adolfo Santos**

“Mi papá se murió hace cuatro días, está hinchado, está apestando, no se puede aguantar a mi papá aquí”, así suplicaba Verónica Bone a las autoridades sanitarias de Guayaquil. Como en un escenario de guerra, los cadáveres se agolpan en las morgues de los hospitales y cementerios, que están abarrotados y sin capacidad para recibir más cuerpos. Es posible, incluso, encontrar muertos abandonados por los familiares en las calles, tapados con sábanas o plásticos.

En esta importante ciudad portuaria sobre la costa del Pacífico, de más de 2,5 millones de habitantes, la tragedia parece más desoladora. La situación se torna desesperante por las largas filas de los familiares que solicitan el retiro de los cuerpos de sus hogares, o cuando tienen que reconocerlos. Cementerios que normalmente recibían treinta muertos por día ahora deben encargarse de enterrar a más de cien y no dan abasto.



Se comenta que el contagio masivo se debe a la vuelta de gran cantidad de migrantes que en esta época regresan de Europa, principalmente de España. Sin duda esto es parte del problema. Pero, según médicos y sanitaristas, los estragos que está causando la pandemia en Ecuador se deben a la falta de disponibilidad del test para detectar el Covid-19, lo que dificulta la toma de medidas preventivas. Son falencias propias de un país con gobiernos patronales que vienen vaciando la salud pública para atender las exigencias del FMI y de los grandes empresarios.

En 2019 los campesinos, indígenas y trabajadores, en una potente demostración de fuerza, doblaron el brazo del gobierno y el FMI. En estos días se han retomado las protestas contra las autoridades exigiendo medidas contra la pandemia. Apostamos a esa movilización para obligar al gobierno a colocar todos los recursos al servicio de la salud pública y superar esta tragedia.